

POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OPINIONES

POBREZA Y DESARROLLO

El primer mensaje de las organizaciones empresariales en torno a la salida de la pobreza, evidentemente tras salvar la consideración ética que produce, se refiere al desarrollo económico como única vía que contribuya a su solución.

En ocasiones, ciertamente, se ha puesto de manifiesto, como ocurre en algunos países, que la riqueza de unos pocos no compensa la extrema pobreza de muchos. Por el contrario, en España, al amparo de la economía social de mercado predicada por la Constitución, nadie niega la obligación de los poderes públicos de apostar por una distribución de la riqueza que permita mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos.

Pero en esta expresión es donde las empresas ponemos el acento. Sólo es posible distribuir la riqueza y, por ello, la prioridad en la lucha contra la pobreza debe ser el continuo aumento de la riqueza. Esto es obvio y, sin embargo, a nadie se le oculta que la dificultad estribará en el equilibrio en las decisiones entre la natural tendencia a la dotación de políticas sociales que palién las consecuencias de la pobreza, con respecto a las decisiones que busquen la solución de la causa, es decir, que traten de solucionar las causas de dicha pobreza.

Sin duda, los problemas de pobreza tienen múltiples causas, junto con aquéllas de origen social, personal y familiar, de falta de una mínima educación, analfabetismo funcional, desarraigo, falta de la más imprescindible formación para el trabajo, aspectos sociológicos y también psicológicos, etc. que deben tener múltiples vías de acción, la falta de una oportunidad real en el ámbito laboral puede tener un tratamiento con mayor implicación para las empresas. Permitir experiencias laborales a quienes padecen la exclusión social debe ser siempre la alternativa de inserción más lógica. Esta alternativa podrá estar, en ocasiones, reñida con la natural tendencia a la estabilidad en el empleo, que cederá ante el fin buscado de ofrecer prácticas y posibilidades laborales mediante contratos temporales, allí donde esta temporalidad deba ser fomentada para atender al fin de la salida a la marginalidad mediante la incorporación al denominado mercado de trabajo. Un extraño fenómeno se empieza a vislumbrar, y que emerge a golpe de titular en la prensa a propósito de la conversión de España en país de acogida de inmigrantes. Con las altas tasas de paro -afortunadamente continúan cediendo- que registramos, parece una contradicción el que existan puestos de trabajo que no se cubran por los parados nacionales, y que estén ocupando, cada vez más y casi en exclusiva, los inmigrantes extra comunitarios.

El desarrollo económico es, directamente, la mejor garantía para el mantenimiento y crecimiento del empleo, y este empleo, a su vez, avala el sostenimiento del sistema financiero de la Seguridad Social, permitiendo la percepción de las pensiones y prestaciones.

Paralelamente, el desarrollo económico produce, de manera automática, un signo positivo en la recaudación fiscal, que permitirá dotar las políticas económicas y sociales que aborden esta situación.

Los datos de pobreza son preocupantes, a pesar de que se constata alguna mejoría en el panorama regional, y por ello desde CECALE se ha apoyado su estudio e inclusión en los informes de este Consejo Económico y Social, de cara a favorecer las acciones paliativas que sean posibles.

José Elías Fernández Lobato
Presidente de CECALE. Vicepresidente del CES

LA REBELIÓN DE LOS RICOS

El proceso de concentración de la riqueza se ha acelerado en progresión cuasigeométrica durante las últimas décadas del siglo XX. A modo de ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas indica que el 20% de la población mundial que vive en los países de mayores ingresos acapara el 86% del PIB mundial. Una mínima parte de las rentas de las principales fortunas del mundo podrían escolarizar a cientos de millones de personas o dotar de agua potable a extensísimas áreas en decenas de países. Este panorama, humanamente desolador, se complementa con el incremento de las desigualdades interiores en los países llamados desarrollados, en los de nuestro entorno, en el nuestro propio. Los índices de pobreza en estos estados cuando menos se estabilizan, siendo frecuente una tendencia al alza en el diferencial entre ricos y pobres, desgarrando el tejido social lenta pero constantemente.

Una economía como la española, que en los últimos siete años no ha dejado de crecer, por encima de la media europea y con valores actuales por encima del 4%, mantiene a dos millones y medio de personas en desempleo de las que, nueva exclusión, dos terceras partes son mujeres. Y aun entre estos apartados del empleo hay divisiones: poco más del 40% (del 30% en Castilla y León) tienen protección económica del Estado, mientras que el resto tiene que sobrevivir por sus propios medios.

Así, durante los últimos años se ha venido produciendo lo que alguna escuela económica ha denominado "decoupling", que podríamos traducir por desenganche, desafección. Una clase social cómodamente instalada en el sistema, activa y productiva, con tendencia al crecimiento de sus rentas y por otra parte los "desenganchados" apartados del empleo, expulsados del mercado de trabajo (fundamentalmente varones de mayor edad) o que nunca han llegado a él (mujeres, jóvenes con problemas de formación, etc.). Mientras que la primera debe sostener con sus rentas los sistemas de protección social, el estado del bienestar, los excluidos reciben sus beneficios. Esto unido al creciente envejecimiento de la población, que en Castilla y León ha superado todas las alarmas, provoca graves tensiones sociales.

El peso de los elementos ideológicos o de los valores morales pierde peso en este alumbrado nuevo siglo; la solidaridad, la igualdad, la fraternidad o el humanismo ceden ante el mercado, el individualismo y la globalización. Así, los más ricos encabezan una rebelión contra la solidaridad que lenta y contundentemente avanza en la dirección de aminorar el lastre que los impuestos y las cargas sociales suponen para la mayor elevación de sus rentas, colocando en el mercado servicios esenciales y redistributivos como la pensiones y la sanidad. Ciertamente este mensaje de sálvese quien pueda va calando en un amplio sector de la sociedad, a veces inconsciente de los gravísimos riesgos del irredentismo social que se crea en los excluidos.

Acercando el foco del análisis a lo más cercano no podemos dejar de constatar la evidencia empírica de la relación entre exclusión y empleo, que no dejan de ser anverso y reverso de la misma realidad. La precariedad y eventualidad de los empleos de muchos jóvenes, sus bajos salarios, la discriminación laboral de la mujer y el desempleo de los mayores de 45 años expulsados del mercado de trabajo son la muestra de la desigualdad como fenómeno social.

El trabajo remunerado es en la sociedad española la principal fuente de obtención de ingresos, el 67% de los recursos familiares según el Eurostat provienen del salario, pero también el principal vehículo de integración, de estabilización social y de fomento de valores de cohesión. De él dependen en gran medida elementos de posición social, de valoración personal y de estabilidad familiar. Pues bien, en más de 600.000 hogares españoles todos sus miembros estaban en paro al acabar 1.999, en su mayor parte sin cobertura por desempleo.

La proyección de esta realidad al futuro inmediato no es muy esperanzadora. El retroceso de la estructura familiar tradicional en España, que ha hecho de amortiguador de conflictos sociales que de otra manera hubieran sido inevitables, es evidente e irreversible, las reformas fiscales dotan al Estado de menor presupuesto y el objetivo de déficit cero provoca una progresión decreciente del gasto social.

CC.OO. viene proponiendo medidas que palien esta situación, en la perspectiva de invertir un proceso indeseado e injusto por un proyecto social igualitario y solidario. Para ello hay que tratar desigual a los desiguales para conseguir la verdadera igualdad de oportunidades. Algunas pinceladas bosquejan las actuaciones que se proponen. En cuanto a las mujeres es necesario romper con un modelo que hace recaer de forma desigual el reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, rompiendo roles sociales arcaicos. Es necesario utilizar la negociación colectiva para empujar la igualdad real de las condiciones de trabajo y laminar los obstáculos para su permanencia en el empleo, así como medidas legislativas para impulsar el incremento de su tasa de actividad. Apartar la idea de que juventud y precariedad están indisolublemente unidas y evitar que los trabajadores emigrantes sean carne de economía sumergida deben estar en la primera línea de la batalla para sofocar esta nueva (o no tanto) rebelión de los ricos contra la justicia.

Carlos Alberto Capa Gil
Secretario de Comunicación de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León y Consejero del CES de Castilla y León.

MEDIO RURAL: POBREZA SOSTENIDA GRACIAS A LA AUSTERIDAD

Si bien es cierto que las principales y más graves "bolsas" de pobreza se registran en los núcleos urbanos, la pobreza no es desgraciadamente ajena al medio rural, aunque regularmente pase más desapercibida, gracias al mantenimiento de un nivel de relativa subsistencia.

Podemos observar como la migración ha desplazado a la población más joven hacia los núcleos industriales, y atendiendo a los índices de desempleo en el medio rural, podríamos llegar a la conclusión errónea de "puesto que apenas hay paro, no hay necesidad". Con ello, estaríamos ignorando que existe un elevado porcentaje de población rural subsidiada, que recibe una pensión mínima, procedente del Régimen Agrario de la Seguridad Social, tantas veces denunciado como insuficiente por ASAJA, y que no cubre ni las necesidades básicas de la familia más modesta que reside en el medio rural. Esta subsistencia precaria se ve agravada en situaciones muy frecuentes en los pueblos, como aquellos jubilados que sólo cobran una pensión no contributiva, los que "disfrutan" de una pensión de invalidez.... Estas personas, en muchas ocasiones cabezas de familia, subsisten con ingresos mínimos y amparándose en un modo de vida tradicional, donde la austeridad es una de las reglas supremas.

Precisamente la despoblación hace cada vez más frecuente y grave la soledad y el aislamiento, ya que hasta hace algunos años las carencias de servicios sociales —que hoy en muchos casos continúan— eran suplidas con el esfuerzo de las familias y de los vecinos; un apoyo cada vez menor, cuando sólo quedan personas muy mayores en los pueblos más pequeños. Esta carencia de servicios sociales viene acompañada en numerosos pueblos de una falta casi total de la mayoría de servicios que para los habitantes del medio urbano son esenciales (farmacias, atención sanitaria básica, tiendas de alimentación, de ropa...) e incluso de las infraestructuras mínimas que deben existir en cualquier población por pequeña que sea o lo alejada de la ciudad que se encuentre. Si este panorama lo completamos con una escasez y casi siempre inexistencia de centros de ocio, nos daremos cuenta de las dificultades que atraviesa la población rural.

Respecto a las personas en edad laboral, hay que recordar que el salario del obrero del campo sigue siendo el más bajo de los sectores productivos. Incluso muchos titulares de pequeñas explotaciones, en esta economía cada vez más competitiva, no han tenido más remedio que complementar su renta con actividades alternativas o trabajos eventuales, cuando no, hipotecar su casa y su explotación hasta límites poco soportables.

La situación para los jóvenes y para las mujeres que desean incorporarse al mercado laboral es incierta, ya que el trabajo por cuenta ajena en los pueblos es casi inexistente, siendo el autoempleo la única y nada fácil alternativa. Esta falta de dinamismo lleva a estos sectores de la población rural a emigrar a las ciudades, provocando a su vez esa ruptura del apoyo social comentado líneas más arriba: es pues, un círculo vicioso que exige medidas políticas de gran calado, que impliquen un verdadero desarrollo endógeno y global de los pueblos, y no iniciativas puntuales de cara a la galería.

Es, pues, clave la búsqueda de nuevos mercados de trabajo, incluyendo la creación y mantenimiento del empleo, así como proporcionar un escenario que permita a las mujeres rurales avanzar en plena igualdad. Porque el "desarrollo rural" no puede limitarse a ser una consigna para ganar simpatías electorales, sino que debe arbitrar un conjunto de medidas políticas que permitan mejorar los niveles de renta y condiciones de vida de las personas que viven y quieren seguir viviendo en este ámbito.

Teresa Sanz Nieto
Gerardo Dueñas Merino
ASAJA de Castilla y León

POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La pretensión de llevar a cabo un análisis sociológico sobre la pobreza y su tremenda incidencia en la desigualdad de oportunidades, es un tema suficientemente manido, sobre el cual parece necesario que todos los agentes sociales aporten nuevos puntos de vista sobre los que proyectar nuevas e imaginativas soluciones, dado que hasta la fecha y con las "recetas" neoliberales al uso, la realidad es que las diferencias

se van haciendo paulatinamente cada vez más pronunciadas. No sólo existen diferencias muy acusadas entre el norte y el sur de la Unión Europea; es que, en nuestro país, esas diferencias se acrecientan día a día y Castilla y León es una región lisa y llanamente pobre y por mucho que se nos quiera hacer creer lo contrario, lo cierto es que sigue siendo una región objetivo prioritario de los fondos estructurales europeos, con un tejido industrial débil y polarizado en una zonas muy concretas, que añadido a las particulares características de población y territorio, nos ponen de manifiesto los consiguientes desequilibrios internos en términos tanto de renta como de igualdad de oportunidades.

Es cierto que la situación de partida es francamente preocupante: mucha extensión con una dependencia aún muy importante de la agricultura en cuanto al PIB, baja densidad de población, además muy envejecida, problemas estructurales graves, etc pero no es menos cierto que, aún a pesar de lo mucho que se ha avanzado (partiríamos de casi de cero), sigue tratándose de una Comunidad Autónoma que avanza en el furgón de cola en cuanto a su posición a nivel de renta.

Cuando hablamos de renta per cápita, P.I.B. no podemos olvidar que son términos macroeconómicos que, aunque evidentemente tienen su incidencia, poco tienen que ver, no obstante, con la realidad de las economías domésticas, verdadero elemento nuclear sobre el que se debe partir en cualquier análisis, -y no digamos desde el punto de vista del consumo,- más allá de lo puramente estadístico, sobre la incidencia de la pobreza y la igualdad de oportunidades en una sociedad supuestamente desarrollada.

Los elementos básicos que inciden en una variación de la igualdad de oportunidades no difieren sustancialmente respecto a otras perspectivas y las posiciones que éstos ostentan, son la causa que impide una verdadera vertebración de la sociedad sobre la que se proyectan. Sobre todo dos pilares básicos caracterizan esta situación:

a) Empleo: Desde otras ópticas, sin duda más autorizadas, ya se ha hecho hincapié en evidenciar el perfil actual de la situación: Alta tasa de desempleo, flexibilización del mercado, moderación salarial, empleo atípico, precariedad y consiguiente alta tasa de siniestralidad, etc. Esta situación, respecto de la base de los ingresos familiares de los ciudadanos, no puede permitir muchas alegrías y, lo que es peor, muchas esperanzas al ciudadano de nuestra región. Los datos de la EPA relativos al primer trimestre de 2000 reflejan un descenso, a nivel nacional, de los desempleados, mientras que en nuestra Comunidad ha subido casi un 3%.

Esta situación de alto índice de desempleo, de inseguridad en el mismo, de precariedad, de falta de perspectivas razonables, tiene una incidencia considerable en el umbral de pobreza de nuestro país, en general y de nuestra Comunidad Autónoma en concreto, situación que condiciona la demanda interna -el consumo- y retorna a su vez, negativamente, sobre el mercado laboral.

b) Formación: La desigual distribución de rentas, tanto en el ámbito nacional como en nuestra Comunidad Autónoma, mantiene la misma tónica en lo relativo a la formación de sus ciudadanos respectivos.

Estadísticamente, (1991), es cierto que el nivel de analfabetismo de nuestra Comunidad es inferior a la media nacional, resultado también extraíble respecto del nivel de estudios primarios de su población. No obstante a lo anterior, consecuencia de una suficiente atención por la Administración nacional hacia nuestra Comunidad, a pesar de la atomización de las poblaciones, y dispersión de las mismas en una amplia extensión, toda la enseñanza secundaria, media y superior refleja unos índices de formación de la población residente en la Comunidad inferiores a la media nacional.

Resulta cada vez más evidente la necesidad de una formación orientada al mercado laboral, formación especializada que debería facilitar una rápida incorporación al mercado de trabajo y la consiguiente disponibilidad de rentas, pero ahí es donde la estadística evidencia las carencias de nuestra Comunidad respecto a los índices nacionales.

Nadie duda que el nivel de riqueza condiciona las posibilidades de una formación más sólida, más prolongada y más especializada, más aún considerando la dispersión poblacional de nuestra Comunidad con excepción de unos núcleos bien definidos, pero no es menos cierto que, a pesar de los avances en este sentido, mucho más tiene que avanzar nuestra Comunidad, ahora con competencias plenas en materia de educación, facilitando las opciones para que su población alcance siquiera los niveles medios nacionales que garanticen adecuadamente una aceptable igualdad de oportunidades que permitan salir de la situación real de pobreza de sus residentes.

Prudencio Prieto Cardo
Presidente de la Unión de Consumidores
de Castilla y León y Consejero del CES de Castilla y León

LA MODULACION DE LA PAC Y LA JUSTICIA SOCIAL

Cuando hablamos de pobreza e igualdad de oportunidades, y nos centramos en el mundo rural, nos enfrentamos a una realidad muy diversa, polivalente y gran cambio, con situaciones sociales y económicas muy diversas. Lo primero es ser consciente de que las relaciones sociales son más estrechas, ya que en los pueblos todos nos conocemos, sabemos cómo viven nuestros vecinos, sus problemas y alegrías. Por otro lado, las fuentes de pobreza extrema estables, entendiendo como tales los desposeídos de todo, son menores al ser mayor las posibilidades básicas y menores las necesidades creadas. No obstante, la pobreza es mayor y los recursos económicos menores a nivel general. En espacios de terreno reducidos conviven economías extremas.

Cuando hablamos del medio rural la agricultura y la ganadería son las actividades económicas básicas, que por sus características marcan el estilo de vida y entorno en este medio. Por esto, la política agraria aplicada en ellos repercute directamente sobre las gentes que aquí viven. Nos encontramos con un sector fuertemente intervenido en el ámbito europeo.

La reforma de la Política Agraria Comunitaria que comienza en 1992 busca la permanencia y protección del sector agrario. Éste se ve forzado por los altos costes de almacenamiento de excedentes producidos a nivel comunitario, así como de destrucción de dichos excedentes. Con la reforma se pretende la reducción de excedentes y el mantenimiento de las rentas en el sector. Esto se va a concretar en primar, no a la producción, sino a la superficie y la retirada de las tierras, y por otro lado controlar la producción mediante la imposición de un sistema de cuotas y derechos de producción. Recientemente, con la Agenda 2000 se ha dado una vuelta de tuerca más a dicha reforma, rebajando los precios de intervención, situándose estos incluso por debajo de los precios de producción.

Esto ha ocasionado que al agricultor y ganadero no se le pague por producir sino por tener tierras, con independencia de la capacidad de producción. Esto hace que una vez más, los que más tienen más reciban y a los que menos tienen se les retiren hasta las capacidades que tienen. Con esto se consigue que en el mundo rural no sea el trabajo y el bien hacer de las cosas lo que genere riqueza, sino la propia riqueza, acentuándose las desigualdades y alejando de las oportunidades económico-sociales a los más pobres.

Desde UPA Castilla y León creemos que las desigualdades producidas en el sector agrario deben de ser intervenidas desde una política agraria y social que pasa por la MODULACIÓN, entendiendo por tal un reparto de los recursos con mayor justicia social.

La Modulación podría equilibrar las desigualdades, no a costa de quitar a unos para poner a otros, sino desde el hecho de repartir los recursos que salen del bolso de todos los contribuyentes de una manera más justa, evitando el enriquecimiento de los que más tienen y la marginación de los más pequeños.

Las capacidades de producción se basan en unos derechos y cuotas, con los que claramente se especula, siendo inaccesibles para las economías modestas de las explotaciones familiares. Cuando nosotros hablamos de Modulación entendemos que dado el sistema impuesto, habrá que posibilitar especialmente el acceso a los bienes de producción a aquellos que menos medios materiales tienen, posibilitando el que alcance unos niveles económicos que le permitan llevar una vida digna. Esto a su vez conseguirá fijar las personas al medio evitando el continuo despoblamiento que viene sufriendo, que inevitable y lógicamente viene por poner al alcance unos recursos básicos de vida y de producción.

En un mundo donde la hambruna hace presencia se da el contrasentido que a otros se nos pagan por no producir yendo en contra de lo que sería normal. Mientras unos no tienen que llevarse a la boca en otros sitios se invierten cantidades inmensas en destruir las producciones. ¿No sería posible aplicar políticas agrarias más humanas donde se tuviesen en cuenta todas las situaciones? ¿No se podría plantear una política de excedentes que en lugar de terminar en su destrucción fueran a aquellos sitios que más lo necesitan?.

Francisco Fernández Aguado
Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León
Consejero del CES de Castilla y León

